

La crisis tensa el eslabón más débil

La situación económica y la falta de apoyo de la Administración ponen en peligro 2.000 contratos en los centros que emplean a discapacitados mentales e intelectuales

DANI CORDERO / Barcelona
 Salva explica que el fin de semana lo pasará esquiando mientras coloca un supuesto estómago de plástico en una bandeja. Es uno de los primeros trabajadores que integran una cadena formada por más de una docena de personas que se encargan de completar un fascículo sobre el cuerpo humano destinado a Italia. Unas pocas máquinas resolverían todo el proceso -colocar la bandeja, poner el inyectado de plástico y el folleto correspondiente, una protección de plástico, sellado y etiquetado- en un santiamén, pero en el Taller Escuela Barcelona (TEB) prima el mantenimiento del empleo de personas con disminución mental e intelectual. De ahí que de máquinas, el mínimo.

Ese precepto se mantendrá si la crisis y las ayudas de la Administración lo permiten. De momento, el miércoles sus responsables están citados ante la Inspección del Trabajo para hablar de un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal sobre 200 personas que se prolongará durante un año, aunque con una afectación real de sólo seis meses. La regulación afectará a Salva, que procede de una familia sin problemas económicos, pero también a otros trabajadores de familias con menos recursos y que en algunas ocasiones dependen del salario mínimo interprofesional de estos trabajadores para poder pasar el mes. Hay de todo en la viña del Señor.

El problema es social, pero también por quiénes son los potenciales afectados. «El trabajo es la forma de integrarlos y ellos no podrían estar en una empresa ordinaria», subraya Loli Savalls, gerente de la Coordinadora de Tallers de Discapacitats Psíquics de Catalunya. «Trabajar quiere decir contribuir al PIB y a la propia autoestima. Defendemos que esta gente pueda tener un lugar de trabajo remunerado», señala también Josep Maria Solé, responsable de la Associació Prominusválids de les Garrigues.

Ambas explicaciones no esconden estar a la defensiva. Consideran que el «último eslabón de la cadena productiva, el más débil» -como lo define Savalls- está al borde del precipicio. Un informe elaborado por las principales asociaciones que representan a los centros especiales de trabajo (CET; que dan empleo al 53% de los discapacitados) de iniciativa social, básicamente destinadas a emplear a discapacitados mentales e intelectuales, considera que o se ponen los mimbres para que la situación dé un vuelco de forma urgente o se quedarán sin empleo 2.000 personas, una quinta parte de los trabajadores que albergan los CET catalanes. De una tacada, se acabaría con el doble de los empleos que se han podido generar entre el colectivo en tres años, entre 2006 y 2008.

Una de las cuestiones es la dificultad de volver a encontrar des-

pués un empleo para ellos. Y en este caso, el tiempo es oro. «Para ellos, el salto de un año entre estar y no estar trabajando es brutal», señala Francesc Martínez de Foix, gerente del TEB Barcelona, quien recuerda que en muchos casos, a partir de los 45 años, se empiezan a dar casos de Alzheimer. La longevidad de la carrera laboral está condicionada por la salud.

Los expedientes de regulación afectan ya a los centros especiales de trabajo

El empleo es la forma de integrarlos, de que aporten al PIB y mejoren su autoestima

La Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar el 2% de su plantilla a disminuidos o adquirir productos a empresas de este tipo, no se cumple. Y pese a eso, las empresas que dan empleo a este tipo de colectivo deben mantener en números negros (beneficios) sus cuentas de resultados. Ese equilibrio era complicado de conseguir en los últimos años, pero la crisis significa bajada... y las ventas caen un 30%, los beneficios también y el empleo se resiente.

Incluso la morosidad no sabe de consciencia social. Las listas de espera, tampoco, señala Martínez de Foix. Asegura tener 200 casos con la expectativa en un puesto de empleo que para los que esperan no llega en un plazo de 5 ó 6 años. Y eso que el centro da empleo a 700 personas. Además, la deslocalización de los últimos años también les afecta, al responder al perfil de empresa extensiva en el uso de mano de obra poco cualificada. «¿Cómo competir en precio en esa situación? «La situación es insostenible y necesitamos una reconversión, pero las reconversiones cuestan dinero y las administraciones bien que lo ponen para sectores como el de la automoción», señala Savalls.



Empleados de Asproseat, un centro que nació de la iniciativa de empleados y padres de disminuidos de Seat. / SANTI COGOLLUDO

Los centros piden ayuda a la Generalitat

D. C. S.
 El sector no puede más y hace una semana que se reúnen con las conselleras de Acció Social y Treball, Carme Capdevila y Mar Serna. Sus responsables saben que la crisis ha sido el detonante de su crítica situación, pero que los cientos quedan ya muy lejos, allá por los años 80, cuando se pusieron los mimbres de las ayudas económicas para facilitar la creación de empleos. Desde entonces no se han actualizado y se consideran desatendidos por la Administra-

ción. La creación de un empleo está subvencionada con 12.000 euros -imposible de amortizar-, y las asociaciones consideran que se tiene que modular esa asignación según la minusvalía pero hasta triplicar esa cantidad.

El Gobierno también subvenciona hasta un 50% del equivalente al SMI del empleado. Las entidades reclaman que esa ayuda llegue al 70% y argumentan que es normal porque mientras sus márgenes no han crecido, las distintas reformas

del Gobierno para incrementar ese salario mínimo interprofesional han provocado que el salario crezca un 30% en el plazo de tres o cuatro años, y seguirá subiendo.

Todas esas condiciones han hecho que la rentabilidad media de los CET se haya situado en un desfase de los ingresos respecto al 15% de los gastos. Eso, según el informe elaborado por las distintas asociaciones, significa que la inviabilidad laboral afecta a un 14,6% de la plantilla.

Las asociaciones consideran necesaria la creación de un fondo que permita financiar la reconversión de los centros, siempre y cuando los proyectos de viabilidad reúnan los requisitos necesarios. Pero eso sólo será posible si la Generalitat se implica en el problema, como han hecho otras comunidades autónomas. De momento, las 'conselleries' consultadas la pasada semana han accedido a crear una mesa de seguimiento junto a representantes del sector. La cuestión de los recursos es el argumento esgrimido, según fuentes cercanas a la reunión, para no poder concretar medidas.